



Extracted from *Thinking Politics: Think Tanks and Political Parties in Latin America (Spanish)*

© International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

**International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden
Phone +46-8-698 37 00, Fax: +46-8-20 24 22
E-mail: info@idea.int Web: www.idea.int**

Think tanks y partidos políticos en el Perú: precariedad institucional y redes informales

Martín Tanaka, Sofía Vera Rojas y Rodrigo Barrenechea

Introducción

Una relación ideal entre *think tanks* y partidos políticos es aquella en la que los primeros, como centros de producción de conocimiento académico y aplicado, colaboran activamente con los segundos, contribuyendo a mejorar la capacidad de formulación de propuestas de los actores políticos y, por ende, la calidad de las políticas públicas. Los partidos se apoyan en estas instituciones ya sea para la elaboración de programas y propuestas en los momentos electorales, como para el diseño de políticas públicas y la provisión de cuadros profesionales en el caso de los partidos de gobierno, o la presentación de alternativas, en el caso de los partidos de oposición.

En el Perú, sin embargo, debido a la debilidad institucional y profunda desconfianza entre ambos actores, no se da esta relación virtuosa entre *think tanks* y partidos políticos. En cuanto a los segundos, como resultado de la crisis del sistema de partidos ocurrida en la década de 1990, aparecen sumamente precarios y volátiles; actúan básicamente movidos por consideraciones pragmáticas y de corto plazo, por lo que sus planteamientos y políticas responden a coyunturas específicas, y no siguen lineamientos ideológicos o programáticos claros. En este marco, la demanda de los partidos por técnicos e intelectuales es, más bien, limitada, lo mismo que su interés por capacitar a sus cuadros y militantes. Además, los partidos miran con desconfianza el mundo de las ONG y de la sociedad civil.

En el momento actual se percibe la existencia de dos grandes grupos académico-tecnocráticos, uno de izquierda y otro liberal; el primero es mirado con recelo por supuestamente pretender conseguir como grupo de interés lo que no logra mediante la competencia electoral; y el segundo, por su supuesto apoyo, involucramiento e incluso complicidad con el gobierno de Alberto Fujimori. Los *think tanks* no solo son escasos sino frágiles institucional y financieramente, condiciones que limitan su capacidad de investigación e incidencia pública. Por su lado, estos también miran con desconfianza el mundo político, percibido como corrupto y oportunista, por lo que tienden a actuar con criterios elitistas y tecnocráticos. Como consecuencia de ello, la distancia entre partidos y *think tanks* se ahonda.

En este contexto, el proceso de elaboración de políticas públicas parece depender fundamentalmente del funcionamiento de redes y contactos informales entre políticos, grupos tecnocráticos y poderes de facto, antes que de mecanismos de deliberación pública institucionalizados, transparentes y con rendición de cuentas.

Ello explica la sorprendente continuidad que han tenido las políticas públicas en el Perú desde la década de 1990, pese a los importantes cambios de gobierno e incluso de régimen político, que han facilitado el crecimiento económico; pero también los problemas de legitimidad del sistema político y los sesgos de las políticas públicas, que no cumplen con metas sociales y objetivos redistributivos.

1. Visión general: precariedad institucional y redes informales

Una primera interrogante que es preciso responder acerca de la relación entre *think tanks* y partidos políticos en el Perú, es por qué se da aquí la ausencia de centros de pensamiento fundados por los propios partidos o por algunos de sus integrantes como ocurre en otros países.

La respuesta se encuentra en el tipo de organizaciones que compiten por el poder en el Perú y en la manera en que tal competencia se ha llevado a cabo. Lo primero que debemos considerar es que la política peruana aparece signada por el pragmatismo y la debilidad institucional y programática de los partidos políticos.

A diferencia de otros países de la región, los partidos políticos peruanos de mayor antigüedad tienen un tiempo de vida relativamente corto, fruto de una vida republicana en la que la democracia como régimen político ha sido la excepción antes que la regla. Tradiciones partidarias de larga data, como pueden encontrarse en Colombia con partidos políticos fundados en el siglo XIX, o experiencias de competencia ordenada en un sistema de partidos como en Chile, o en Bolivia durante los años de la llamada “democracia pactada”, son ajenas a la experiencia peruana.

En el Perú, los partidos ideológicos todavía vigentes en la actualidad, con la excepción del Partido Aprista Peruano (PAP), surgieron en la segunda mitad del siglo XX y su consolidación en la arena electoral no se dio sino hasta la implantación de una democracia plenamente competitiva y sin exclusiones en 1980, luego de doce años de dictadura militar.

El sistema de partidos vigente durante la década de 1980, compuesto por el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano (PPC), Acción Popular (AP) y por la

coalición de partidos Izquierda Unida (IU), no solo perdió vigencia al iniciar la década de los noventa, sino que tuvimos un colapso total del sistema de partidos, entonces un fenómeno casi sin paralelo en el mundo. Luego vinieron los años del fujimorismo, en los que se configuró una forma de régimen que podríamos calificar como “autoritarismo competitivo”.¹

Los partidos fueron satanizados y hostilizados, y proliferó la creación de movimientos personalistas y extremadamente pragmáticos, poco más que maquinarias electorales con escasas perspectivas de supervivencia entre una elección y otra. Al caer el fujimorismo, los partidos ideológicos reaparecieron en 2001, muy debilitados y sin arraigo en la sociedad, coexistiendo con las nuevas y precarias organizaciones políticas formadas en los años noventa.

Como es de esperar, el desarrollo de una institucionalidad partidaria ha sido muy limitado. En medio de una historia marcada por la volatilidad y las interrupciones, los partidos han funcionado, en general, con lógicas verticales y personalistas, y no han logrado construir y consolidar órganos partidarios especializados en la generación de ideas y propuestas de política, y establecer relaciones estables con universidades y centros de estudio, investigación y reflexión académica.

En el Perú no existen los *think tanks* “orgánicos” a los partidos que se ven en otros países. En Chile, Colombia e incluso el Ecuador, encontramos ex presidentes o líderes de facciones de los partidos que fundan centros de pensamiento para generar propuestas de campaña y así competir mejor en las arenas intrapartidaria e interpartidaria.

Lo más que descubrimos en el Perú en algunos de los partidos llamados “tradicionales”, como el PAP y el PPC, son centros de formación de militantes, pero enfocados en la difusión de la doctrina partidista antes que en la generación de ideas o en la capacitación técnica de potencial personal de gobierno.

Cabe resaltar que estos dos partidos contaron con el apoyo de las fundaciones alemanas Friedrich Ebert y Konrad Adenauer, ambas con presencia en el país desde la década de 1980. La primera, de orientación socialdemócrata, tuvo en el PAP a su principal interlocutor, mientras que la segunda, de orientación socialcristiana, apoyó iniciativas del PPC.

Sin embargo, a diferencia de lo que puede constatararse en casos como Bolivia, el apoyo de estas fundaciones no dio lugar al desarrollo de *think tanks* partidarios. A los fondos relativamente limitados con que cuentan estas instituciones en el Perú, sobre todo

luego de los años noventa, se suma una escasa demanda por parte de los partidos hacia estas instituciones más allá de la realización de eventos partidarios.

Siendo organizaciones muy precarias en términos organizativos y programáticos, que solo parecen movilizarse en el fragor de los momentos electorales, el interés por producir propuestas de política pública que sean el resultado de una maduración de largo plazo aparece como muy secundario. Por ello, usualmente las propuestas y promesas políticas que los partidos presentan a los ciudadanos durante la campaña electoral difieren mucho de lo que efectivamente hacen cuando ocupan funciones de gobierno, hecho que genera problemas de rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando se estudia la representación de los partidos en el Congreso encontramos que, en un contexto de alta volatilidad electoral y debilidad de las organizaciones políticas, los parlamentarios se mueven con consideraciones de muy corto plazo y privilegian como medio para acumular capital político estrategias que no pasan por el diseño y la mejora de las políticas públicas (Mejía 2008).

Al carecer los partidos de *think tanks* “orgánicos”, analizar la relación entre centros de pensamiento y partidos políticos nos lleva a aquellos que son independientes de los partidos. En realidad, hay muy pocos *think tanks* en el sentido estricto del término en el Perú, es decir, centros dedicados a la producción de conocimiento y propuestas con aplicaciones directas en las políticas públicas, con vínculos estables con funcionarios públicos y actores políticos.

Si asumimos una definición laxa y amplia del término, existen algunos *think tanks*, pero tienen poca relación con los actores políticos y su producción no necesariamente se encuentra ligada a aplicaciones de política pública inmediata. Los centros de pensamiento existentes en el Perú son de tres tipos: o son ONG, centros de investigación independientes, o son centros de investigación adscritos a universidades o gremios empresariales, como veremos.

Para entender esta relativa ausencia de *think tanks*, un factor importante que se debe considerar es la precariedad en la que se lleva adelante la investigación y reflexión académica en el país. En general, los fondos para investigación son limitados (no existen prácticamente fondos públicos y no hay tampoco tradición de contribuciones privadas), razón por la cual a los investigadores de estos centros les cuesta mucho establecer agendas propias de trabajo y tienen, más bien, que responder a consultorías y convocatorias de proyectos que siguen criterios y prioridades establecidas por otros. Ello hace más difícil aún que las agendas de investigación de estos centros coincidan con aquellas que los políticos o los formuladores de políticas públicas (*policy makers*) consideran pertinentes, lo que distancia a ambos sectores.

Por un lado, los partidos y funcionarios públicos perciben a los *think tanks* como espacios de reflexión interesante, pero sin utilidad directa para sus decisiones; y, por otro, los investigadores consideran a los políticos como incapaces de comprender y valorar la investigación académica y de abordar temas que vayan más allá de la coyuntura inmediata, debido a la baja calidad de la representación política.

En este punto, Javier Portocarrero, director del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) que agrupa centros de investigación independientes y de universidades nacionales, señaló, al ser entrevistado por los autores de este estudio,² que uno de los principales retos de la relación entre *think tanks* y partidos es adaptar la producción de los centros de investigación a la agenda política de los partidos en el Congreso, y encontrar actores políticos bien preparados y con disposición para adoptar políticas de largo plazo.

Por supuesto, los centros de investigación y el sistema político no se encuentran del todo desconectados. Aquellos que establecen relaciones más directas y continuas con los actores políticos lo hacen con funcionarios y responsables de las distintas entidades del Estado para temas puntuales muy especializados, pero sin la intermediación de los partidos.

Es más, muchas de las estrategias de incidencia diseñadas por *think tanks* con intención explícita de intervenir en la agenda legislativa o en las decisiones del Poder Ejecutivo incluyen como acciones principales organizar redes de influencia en torno a legisladores y funcionarios particulares y no a partidos políticos. En un contexto en que la mayoría de estos se presentan incoherentes internamente y muy indisciplinados, la negociación con líderes partidarios aparece como una mala estrategia, y resulta mucho mejor apelar a funcionarios clave ubicados en posiciones estratégicas o a parlamentarios interesados en un tema en particular, más allá de su militancia política.³

Del mismo modo, cuando los partidos asumen responsabilidades de gestión pública, requieren de expertos y técnicos para ocupar distintos puestos de gobierno; al no tenerlos en casa, muchas veces convocan a técnicos independientes vinculados a *think tanks*.

Paradójicamente, esto suele facilitarse cuando el partido se presenta menos cohesionado y con menor capacidad de control sobre el aparato estatal; por el contrario, cuando el partido tiene mayor fuerza para imponer condiciones, tiene que satisfacer a militantes y adherentes que aspiran a cargos públicos, por lo que muchas veces estas responsabilidades terminan en manos de personas poco calificadas o que utilizan el cargo para hacer política partidaria.

En el caso peruano, según señalaron nuestros entrevistados, cuando se establecen nexos entre centros de pensamiento y entidades del Estado, se trata de relaciones principalmente personales, no institucionales, lo que las hace inestables y dependientes de la permanencia de individuos específicos en posiciones clave.

Esto, como es evidente, limita la posibilidad de desarrollar políticas de Estado y hace sumamente incierto el rumbo de la administración pública. Este elemento es contrarrestado por el carácter pragmático de los últimos gobiernos, que ha hecho que, en medio de todo, prime la continuidad antes que el cambio, por lo menos en las “vigas maestras” del manejo del Estado; en otras palabras, la continuidad es fruto de la inercia y de la falta de iniciativas en contrario, antes que de la convicción de estar siguiendo un camino específico.

¿Cómo llegamos a esta situación tan peculiar en el ámbito regional? En este estudio planteamos que el escenario descrito es consecuencia de los importantes cambios ocurridos en el sistema político peruano en la década de 1990, que frustraron lo que pudo llegar a ser un sistema de relaciones entre *think tanks* y partidos políticos en gestación durante la década de 1980, lo que habría acercado el Perú a lo que se registra en otros países de la región.

A inicios de los años noventa coinciden el colapso del sistema de partidos, el cierre de un número importante de centros de investigación y el final de una política anclada en referentes ideológicos. En este contexto, la izquierda desaparece en la práctica de la política y muchos de sus profesionales se vuelcan hacia las ONG y las universidades; por otro lado, la adopción de políticas orientadas al mercado durante el fujimorismo hace que profesionales liberales o de derecha tengan variados niveles de acercamiento a su gobierno. Caído el fujimorismo, los políticos desconfían tanto de los *think tanks* en donde recalaron ex militantes de izquierda, a los que se ve intentando hacer política desde la sociedad civil; como de aquellos donde recalaron técnicos liberales, considerados como “fujimoristas reciclados”.

Por todo ello, tenemos que el rumbo de las políticas públicas en los últimos años no es tanto resultado de la elaboración de propuestas sobre la base de perfiles programáticos, del debate político y de la deliberación en la esfera pública, sino de la influencia de poderes de facto y redes tecnocráticas informales, lo que reduce la posibilidad de funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas verticales y horizontales.

Esto ha posibilitado una importante continuidad en las políticas públicas, pero también ha minado la legitimidad de las instituciones y del sistema político. Tenemos así una gran

improvisación en los partidos cuando ocupan posiciones de gobierno o de representación, un constante cambio de orientaciones y de personal de gobierno en el corto plazo, mientras que se mantienen incólumes las orientaciones de largo plazo, pese a las demandas de cambio.

A continuación se analizará las diferentes etapas que han atravesado las relaciones entre partidos políticos y centros de producción de ideas y propuestas de política en el Perú, considerando los actores más emblemáticos en cada etapa.

Creemos que es importante repasar estos contextos políticos para comprender las características de las relaciones entre *think tanks* y partidos que predominan en la actualidad. Organizamos este repaso histórico en tres partes: la década de los ochenta, la década de los noventa y el momento actual.

2. La década de 1980: políticos y *think tanks* en los años de vigencia del sistema de partidos

Como ya señalamos, la década de 1980 es el período de mayor presencia de los partidos políticos hoy llamados “tradicionales” en el Perú. La vigencia de un sistema de partidos a nivel nacional se reflejó en una considerable capacidad de los cuatro grupos políticos más importantes —PAP, PPC, AP e IU— para encuadrar las preferencias electorales, intermediar entre el Estado y los principales actores sociales, y sostener un pacto mínimo de respeto a las reglas de juego democráticas.⁴

Esta vigencia permitió desarrollar opciones políticas, ideológicas y programáticas claramente definidas, con partidos que representaban las diversas posiciones del espectro político. En cuanto a la relación entre partidos y *think tanks*, los años ochenta muestran algunos nexos entre ambos, aunque no fueran del todo institucionalizados. Sin embargo, esas relaciones no maduraron sino que se interrumpieron en la década siguiente. La relación existente entre los *think tanks* de la época y los partidos dependió de las coincidencias ideológicas entre ambos, pero se expresó más a través de contactos personalizados que por vías institucionales, como veremos a continuación.

En estos años encontramos, en primer lugar, instituciones que gruesamente cumplieron el papel de *think tanks*; se trata de un número reducido pero importante de organizaciones con capacidad de investigación y planteamiento de políticas públicas. Si bien su trabajo no siempre estuvo vinculado directamente a la producción de conocimiento aplicado, su repercusión en la orientación de los gobiernos fue determinante, no tanto por una vinculación institucional cuanto por medio de conspicuos investigadores

de estas organizaciones. Así, tenemos algunos centros de investigación académica y de promoción identificados con posiciones de izquierda, como fueron el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), o el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), entre otros. Muchos profesionales de esas instituciones tenían cargos de dirección política en alguno de los partidos que conformaban IU o participaron como técnicos en determinadas experiencias de gobierno de IU.

Así, por ejemplo, Henry Pease, entonces investigador de la primera de estas instituciones, desempeñó el cargo de teniente alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana durante la gestión de Alfonso Barrantes (1983-1986), y con él, muchos profesionales de DESCO y otras ONG tomaron parte en la gestión municipal. En el caso del CEDEP, varios investigadores tuvieron vinculación con el primer gobierno de Alan García.

En la orilla liberal, es importante mencionar un *think tank* muy destacado por su influencia en la agenda pública, el Instituto Libertad y Democracia (ILD), fundado en 1981 por el economista Hernando de Soto. Este centro se define a sí mismo como un *think tank* en diálogo con todas las fuerzas políticas y, al mismo tiempo, independiente de los partidos. Desde su creación, el ILD se planteó realizar investigaciones que puedan culminar en propuestas políticas y se rodeó de diversas personalidades con trayectoria política liberal. Tuvo participación activa en la aplicación de algunas iniciativas durante los gobiernos de Belaunde y García, y también durante los primeros años del gobierno de Fujimori. En palabras de otra de nuestras entrevistadas, Ana Lucía Camaiora, directora de investigaciones legales del ILD, el carácter multipartidista de las propuestas del Instituto fue la base de la continuidad de sus proyectos a lo largo de los gobiernos.

En un segundo plano ubicamos a los centros de investigación de las universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. En este grupo podríamos incluir además otras instituciones de investigación o consultoría también sin vínculos tan claros con partidos o gobiernos, como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) o el Grupo APOYO, con posiciones socialdemócratas y liberales, respectivamente. Mientras que los centros de investigación de las universidades y el IEP tenían influencia en el mundo académico, lo propio sucedía con APOYO en el mundo empresarial. Sin embargo, durante esos años ninguna de estas instituciones mantenía contactos directos con el campo político, sea a través de partidos o gobiernos, más allá de la militancia de investigadores individuales. Finalmente, debemos mencionar un número importante de profesionales sin adscripción institucional, algunos de ellos provenientes del extranjero,

que en distintos gobiernos cumplieron el papel de formuladores de políticas, como aquellos que participaron en el segundo gobierno de Belaunde (Conaghan y Malloy 1994).

En el campo más directamente vinculado a los partidos políticos existían, entonces como hoy, algunas instituciones con importantes relaciones con algunos de ellos, como la Fundación Konrad Adenauer, cercana al PPC, o la Fundación Friedrich Ebert, cercana al PAP. Durante los años ochenta, estas fundaciones funcionaron como entidades de ayuda financiera a los partidos, apoyando económicamente iniciativas específicas, solventando sus gastos en diversos rubros, sobre la base de una noción amplia del desarrollo de la institucionalidad partidaria. Sin embargo se trató, por lo general, de apoyos menores e irregulares.⁵

Los actores que hemos descrito —partidos, centros de investigación e intelectuales— desarrollaron relaciones de distintos grados de densidad a lo largo de la época, pero sobre todo se trató de relaciones personales antes que institucionales. En el caso de los partidos de izquierda representados en IU, era común encontrar relaciones con profesionales de ONG y, en menor medida, con centros de investigación en universidades. Uno de los ejemplos más representativos en este sentido es DESCO, muchos de cuyos profesionales participaban como miembros de comisiones de elaboración de planes de gobierno en partidos de izquierda, o como funcionarios en algunos de los gobiernos locales de IU. En este caso, tenemos a un *think tank* proveyendo no solo ideas sino también personal para funciones de gobierno.

Sin embargo, estas relaciones no tomaban la forma de una colaboración institucional entre dos ámbitos —partidos y *think tanks*—, sino de un compromiso individual de intelectuales que también eran activistas políticos, siguiendo el modelo del “intelectual comprometido” u “orgánico”, con lo que las fronteras entre lo académico y lo político se hicieron muy borrosas, para bien y para mal. En los años ochenta era frecuente encontrar a cuadros y personal dirigente de los partidos provenientes del mundo académico; muchos de ellos mantenían su participación en estos centros de investigación sin dejar de lado la militancia y los cargos políticos dentro del partido.

Así, si bien no existían *think tanks* propiamente partidarios, algunos partidos tenían muchos cuadros trabajando en estas instituciones. Henry Pease, candidato a la presidencia por Izquierda Unida en 1990 y teniente alcalde por este frente en la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 1983 y 1986, nos señala, por ejemplo, que la comisión de plan de gobierno de IU para las elecciones municipales de 1983, compuesta en su mayoría por miembros de DESCO, se encargaba no solo del diseño de políticas sino también de realizar labores de cabildeo con la oposición, para conseguir su apoyo a

las iniciativas del alcalde Barrantes. También podríamos mencionar la importancia que tuvo el Instituto Democracia y Socialismo, en tanto congregaba a un conjunto de profesionales que también eran parte de la mencionada comisión.

En lo que respecta al PAP, aunque desde sus orígenes fue el partido mejor organizado, extendido y enraizado de los que conformaron el sistema de partidos en la década de 1980, mostró en esos años dificultades para calar en sectores intelectuales y técnicos de la sociedad peruana. Esto se hizo evidente en su falta de relación orgánica con centros de investigación importantes durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Si bien el PAP tradicionalmente había tenido mucho arraigo en círculos intelectuales, esta influencia se fue perdiendo desde la década de 1960, precisamente cuando la intelectualidad tendía a radicalizarse.

Sin embargo, la relación personal de García con algunos intelectuales vinculados a centros de investigación importantes de esos años le permitió al entonces partido de gobierno tener, por ejemplo, una relación especial con el CEDEP, algunos de cuyos investigadores pasarían a formar parte del círculo más cercano al presidente. Estos intelectuales cumplieron el papel que en otros contextos desempeñan los *think tanks*, aunque de forma más limitada. La producción intelectual y la investigación del CEDEP, publicada en la revista *Socialismo y Participación*, tuvo alto impacto en la política de la época y en el rumbo heterodoxo que tomó la política económica de la primera etapa del gobierno de García.

En cuanto a los partidos de derecha, veamos el caso del segundo gobierno de Fernando Belaunde. Después de la dictadura militar (1968-1980), reinstalado un régimen democrático, todos los partidos se encontraban muy debilitados. Acción Popular tuvo problemas para reclutar cuadros y profesionales suficientes para el desempeño gubernamental. Aunque la fundación de AP en 1955 se había sustentado en sectores medios profesionales, en 1980 no tenía relaciones distinguibles y estables con centros de investigación de la época. Una vez electo presidente, Belaunde se vio en la necesidad de reclutar a un conjunto de técnicos y académicos peruanos en el extranjero para poder implementar sus propuestas de gobierno. Acción Popular ejemplifica claramente la distancia entre los partidos de derecha y los centros de pensamiento en esos años. No encontramos en este caso relaciones ni siquiera con personalidades asociadas a *think tanks*, sino básicamente relaciones personalizadas con técnicos individuales, nacionales y extranjeros, sin adscripción institucional.⁶

Por su parte, el PPC mostraba una fuerte presencia en el gremio de abogados —varios de sus líderes principales eran abogados de prestigio—, pero tenía escasa influencia en

otros grupos profesionales. Sus relaciones con instituciones dedicadas a la investigación y la elaboración de políticas públicas eran escasas. La producción de sus planes de gobierno fue tradicionalmente una tarea de los propios militantes del partido, relativamente cerrada a influencias externas.⁷ El PPC formó parte de una coalición de gobierno con Acción Popular entre 1980 y 1985 (tuvo a su cargo los ministerios de Justicia e Industria). Este partido no enfrentó el reto de asumir como tal el gobierno nacional y, por tanto, tampoco la necesidad de contar con personal político y técnico suficiente para ocupar cargos en la gestión pública, más allá de su responsabilidad en algunos ministerios y gobiernos locales.

Para finalizar con esta revisión a la derecha en el espectro político, es importante resaltar la experiencia del ILD y su relación con AP y el PPC, partidos que convergieron en 1988 junto al Movimiento Libertad en la alianza Frente Democrático (FREDEMO). Liderado por el escritor Mario Vargas Llosa, este frente surgió como reacción al proyecto de estatización de la banca, y fue un intento de la derecha por renovar su imagen y adaptarse a un contexto en que los partidos políticos venían perdiendo credibilidad rápidamente ante la ciudadanía. Hernando de Soto fue miembro fundador de Libertad, pero poco tiempo después se alejó. De Soto había colaborado con el gobierno aprista proponiendo e implementando diversas medidas de simplificación administrativa y de registro predial para la formalización de viviendas; su participación en la gestión gubernamental continuó durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fujimori.

En opinión de nuestra entrevistada Ana Lucía Camaiora, la clave del impacto del ILD estuvo en la publicación de informes y el desarrollo de campañas publicitarias en los principales medios de comunicación sobre temas como la estatización de la banca, la importancia de evaluar los costos que impone sobre la actividad económica la regulación gubernamental, o la necesidad de una reforma de la administración pública. Ayudó al efecto político de las propuestas del ILD, afirma Camaiora, la realización de audiencias públicas con los beneficiarios de sus propuestas, como los comerciantes informales, las organizaciones de base y los líderes comunales. Los actores políticos recogieron las propuestas del ILD y las plasmaron en iniciativas legales como la ley de prepublicación de leyes en el gobierno de Belaunde, o la ley de simplificación administrativa en el primer gobierno aprista.

3. La década de 1990: ajuste estructural, autoritarismo competitivo y redes tecnocráticas

En la década de los noventa hay una importante modificación del escenario descrito como resultado del colapso del sistema de partidos, la agravada crisis económica y la posterior aplicación de las políticas de ajuste estructural. De haber continuado la

dinámica descrita, probablemente el Perú podría haber evolucionado hacia un escenario de mayor institucionalización y de mayores y mejores niveles de coordinación entre política y *think tanks*, como se ha visto en otros países. Sin embargo, la emergencia del fujimorismo, movimiento ajeno al sistema de partidos, como actor hegemónico marcó una ruptura con el pasado. El fujimorismo impuso un discurso autoritario, fuertemente anti-partidario y anti-institucional, de desprecio a la política y enaltecimiento de “lo técnico” y “pragmático” como criterios de decisión. A diferencia de lo ocurrido en contextos autoritarios de otros países, en los que se desarrollaron centros de investigación vinculados tanto a las dictaduras o gobiernos autoritarios como a la oposición política, de donde surgían propuestas que cubrían el espacio dejado por los partidos, en el Perú los años noventa estuvieron marcados por un escaso y frágil flujo de financiamiento para las instituciones académicas y de investigación, impidiendo que se sostuvieran y desarrollaran como referentes para los formuladores de políticas (*policy makers*) y los políticos en general.

La crisis y colapso del sistema de partidos, así como la orientación política del fujimorismo, tuvieron importantes consecuencias sobre las relaciones entre los centros de investigación y los actores políticos. La desaparición de IU y las reformas dirigidas al mercado hicieron que perdieran significancia los *think tanks* de tendencia izquierdista; por otro lado, los nuevos centros de investigación, junto a técnicos llegados del extranjero y del sector privado, de orientación liberal, se convirtieron en el acompañamiento tecnocrático al gobierno de Fujimori. Los técnicos y centros de investigación liberales que cobran importancia en esta etapa funcionan sin ningún vínculo orgánico con los partidos, incluidos los fujimoristas, en la gran mayoría de los casos.

El colapso del sistema de partidos redujo a los partidos vigentes en la década de 1980 a su mínima expresión, tanto en materia de representación política como de organización. Luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, el PAP, AP, el PPC e IU en el Congreso Constituyente Democrático y en el nuevo Congreso instalado en 1995 redujeron su representación dramáticamente, y algunos de ellos, como IU, desaparecieron del escenario político para no volver.⁸ El espacio que perdieron estos grupos será ocupado por nuevos movimientos en extremo personalistas, muy poco ideológicos y altamente pragmáticos. En el caso de AP y el PPC, que como hemos visto no mantenían relaciones orgánicas con ningún *think tank*, su aislamiento fue cada vez mayor con el avance de la década. La alianza de estos partidos con el escritor y candidato a la presidencia Mario Vargas Llosa y su Movimiento Libertad para formar el FREDEMO, principal contendor de Fujimori en las elecciones de 1990, no evitó su deterioro. El *outsider* Fujimori llevó adelante la política de reforma estructural orientada al mercado, principal agenda política de este frente, enfrentado a esos partidos, apoyándose en técnicos e instituciones

“independientes”, que desde entonces incidirán en las políticas públicas mediante vínculos directos con políticos, técnicos y profesionales que cumplieran funciones de gobierno, sin pasar por la intermediación de los partidos existentes. A partir de entonces, estos técnicos constituirían una red de profesionales liberales con nexos estrechos con sectores estratégicos del Estado (como el Ministerio de Economía y Finanzas) (Conaghan 1997) y, junto con algunos *think tanks* liberales y de gremios empresariales, han logrado mantener su influencia en los años siguientes, como veremos.

Como ya señalamos, el PAP no mantuvo relaciones con ningún centro de investigación de forma institucional durante la década de 1980. La crisis extrema que dejó el final del gobierno de García, y luego la salida de este del país ante una supuesta amenaza a su vida por parte del nuevo gobierno, debilitaron los vínculos con los profesionales e investigadores con quienes el PAP mantuviera relaciones durante su gobierno. Este partido, percibido como el causante principal de la peor crisis económica de la historia reciente del país, redujo sustancialmente su influencia política y social. Por último, en el caso de los partidos de izquierda, luego de la disolución de IU y de la posterior pérdida de vigencia electoral de los partidos que conformaron la alianza, muchos de los académicos activistas retornaron a la actividad académica en universidades y centros de investigación y promoción.

En cuanto a los centros de investigación independientes en universidades y ONG, la crisis económica que vivió el país a finales de la década de los ochenta y el posterior ajuste estructural dejaron a muchas de estas instituciones con limitada capacidad para cumplir funciones de investigación. Incapaces de sostenerlas, desmantelaron sus áreas de investigación y se especializaron en labores de promoción social o se dedicaron a la realización de consultorías privadas, reduciendo su margen de influencia pública. Sin embargo, en medio de un contexto favorable a las políticas liberales, surgieron nuevas instituciones: centros de investigación con agendas asociadas a las políticas de reforma estatal y apertura de mercados. Ejemplos de este tipo son el Instituto Peruano de Economía (IPE), o las áreas de investigación de gremios empresariales como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX). Algunas otras instituciones que habían tenido gran impacto en los primeros años del gobierno de Fujimori, como el ILD, que por medio de Hernando de Soto asesoró al presidente sobre las reformas de mercado y la reinserción económica internacional del país, decidieron trasladar sus actividades al ámbito internacional, donde tendrían más oportunidades para llevar a cabo sus proyectos después de que se diera un distanciamiento con el gobierno.

En la década de 1990, entonces, el Perú fue gobernado por un *outsider* que llevó adelante las políticas de ajuste y de reforma estructural en medio de un fuerte desprestigio del

sistema de partidos. En lo económico, el gobierno tendría sus principales referentes en entidades internacionales multilaterales, mientras que en lo político se organizaría un régimen formalmente democrático, aunque con muy limitadas capacidades reales para el ejercicio de la oposición, un “autoritarismo competitivo”. Debilitados los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, el nuevo gobierno mantuvo relaciones sobre todo con técnicos liberales, muchos de ellos provenientes del extranjero o del sector privado, sin adscripción política o institucional en muchos casos.

En ese sentido, el IPE es una institución muy representativa de la época. Fundado en la década de 1990 como parte de una demanda explícita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por investigación en materia de reformas liberales, el IPE surgió en relación estrecha con este Ministerio. Estuvo integrado por técnicos provenientes del extranjero y del sector privado, todos ellos sin militancia partidaria, sin mayor contacto con los partidos de los años ochenta, incluyendo los de derecha, y sin mayor relación previa con algún otro *think tank* en el pasado.⁹ Reivindicando el discurso tecnocrático de la época, estos profesionales asumieron labores como funcionarios estatales y trataron de reducir al mínimo sus nexos con la política, vista como un ámbito regido por intereses particularistas, ajenos a lo “técnicamente correcto” y con consecuencias potencialmente negativas para la agenda de reformas. Así, no solo no mantenían adscripción política alguna, sino que partidos como AP o el PPC eran vistos de forma negativa, “insuficientemente liberales”, “mercantilistas” y contaminados por criterios de decisión “políticos”. Entre esta institución y centros similares, como la unidad de investigación de COMEX, y áreas del Estado clave, como el Ministerio de Economía, se dio una importante relación. Es frecuente encontrar ministros, viceministros y personal de confianza del sector público con algún nivel de relación con estas instituciones, ya sea como investigadores o consultores. Al ser entrevistada por los autores, Patricia Teullet señaló que en los años noventa hubo mucha confluencia de ideas entre el gobierno de Fujimori y las propuestas económicas de COMEX, lo que también se tradujo en la participación de personal de COMEX en puestos de responsabilidad en el sector público.

Si bien tenemos a instituciones y a sus integrantes alimentando con conocimiento e ideas a la gestión pública, y proveyendo al gobierno de personal técnico, esto no llevó tampoco al establecimiento de vínculos con los distintos partidos fundados por Alberto Fujimori: Cambio 90, Nueva Mayoría o Perú 2000 (o más recientemente, Sí Cumple). No existió interés ni por parte de estos grupos ni por parte de estos técnicos de establecer un vínculo estable e institucional entre ambas instancias. Por cuestiones de coincidencia ideológica y programática, estos sectores entraban y salían de posiciones de gobierno, y en ese tránsito establecían relaciones de trabajo con sus instituciones de origen una vez en el Estado. Una vez más, se trata principalmente de relaciones personales no enmarcadas por mediaciones partidarias.

Durante este mismo período, las instituciones identificadas con la izquierda, que tuvieron una importante participación en la producción de ideas durante los años ochenta, no solo retrocedieron en su capacidad de influencia debido a la desactivación o reducción de sus áreas de investigación, sino también por factores políticos. En la década de 1990 estas instituciones serán identificadas desde sectores gubernamentales como frentes de acción de personalidades de izquierda que, sin partido ni capacidad de influencia en el ámbito electoral, optaron por incidir en la agenda política a través de instituciones como ONG y universidades. El trabajo de estas instituciones, típicamente centrado en sectores económicamente vulnerables y en gobiernos locales, era percibido como de oposición al gobierno, por lo que siempre hubo relaciones marcadas por la hostilidad. En esta etapa, a inicios de los años noventa, se creó el grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de ONG que se propuso crear un espacio de producción académica y de investigación crítica al gobierno de Fujimori. Con el avance de los años, sirviéndose del conocimiento con que contaban estas instituciones y de aliados políticos en los gobiernos locales, el consorcio enfocó su interés en la política local y la descentralización, vistas no solo como campos de investigación sujetos a la aplicación de políticas de reforma, sino también como una vía de resistencia ante los intentos de control político por parte de un gobierno centralista y autoritario.¹⁰ Por ello, los nexos con el sector público fueron establecidos primero con alcaldes y luego con minorías en el parlamento, con quienes trataban de impulsar una agenda basada en la promoción de la participación ciudadana y las políticas de descentralización. Curiosamente, los únicos puntos en los que sus sugerencias obtuvieron cierto respaldo en un parlamento mayoritariamente oficialista fueron aquellos ligados a la revocatoria de autoridades electas y otras formas de participación y democracia directa, debido al interés del fujimorismo por debilitar a los partidos políticos con el uso de estos mecanismos.

La experiencia de Propuesta Ciudadana resulta interesante para comprender las dificultades en las relaciones entre *think tanks* de izquierda y partidos políticos en esos años. La izquierda política estaba prácticamente extinta y solo había algunos de sus integrantes en cargos de representación, pero a título individual, no partidario; además, el fujimorismo, fuerza hegemónica, tenía un discurso que estigmatizaba a la izquierda. Así, los intentos de establecer vínculos entre ONG y actores políticos se limitaron a iniciativas en algunos gobiernos locales. En el parlamento nacional, las tentativas de buscar vínculos tuvieron resultados muy precarios: por un lado, las vías de comunicación con el oficialismo estaban prácticamente cerradas; y, por otro, el trabajo con fuerzas de oposición tenía como obstáculo el hecho de que los parlamentarios de esta etapa eran indisciplinados, escasamente cohesionados según bancadas o banderas políticas.¹¹ Por ello, se optó por una estrategia dirigida a individuos específicos antes que a partidos, lo que en cierto modo profundizó su debilidad.

4. El momento actual: la reinstitucionalización democrática y las redes tecnocráticas

La “transición” política luego de más de diez años de vigencia del fujimorismo tuvo algunas características que cabe resaltar para los fines de este estudio. Los partidos políticos entraron a la nueva etapa arrastrando la debilidad de la anterior; no fueron realmente los artífices o protagonistas principales de dicha “transición”, por lo tanto, no fueron capaces de marcar una ruptura muy clara con la situación precedente.¹² Así, desde 2001 no se perciben grandes cambios en las relaciones entre partidos y *think tanks*, pese a la reaparición de partidos ideológicos como el PAP y el PPC (principal fuerza detrás de la alianza Unidad Nacional); estos coexisten con organizaciones personalistas y volátiles, típicas de las maneras de hacer política de la década anterior. En los últimos años, aunque los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García levantaron, cada cual a su modo, banderas de cambio, parecen haberse fortalecido los vínculos entre tecnócratas ubicados en espacios clave de formulación de políticas públicas y algunos *think tanks* a través de redes informales, nuevamente, no de partidos o relaciones institucionales formales. El aspecto positivo de esto es que los parámetros de las políticas públicas fundamentales han mantenido una continuidad importante, escapando así el país de su acostumbrado carácter “pendular” e inestable (Gonzales de Olarte 1991), pero tiene como componente negativo que esa continuidad no es fruto de la deliberación pública, de un debate programático, de un proceso de institucionalización política, sino del mantenimiento de una inercia del pasado inmediato, del funcionamiento de mecanismos informales poco transparentes, debido a la debilidad de los actores políticos y sociales.

Para entender el período actual, insistimos, es importante tomar en cuenta que el tipo de relación informal y personalista que se establece entre los actores que toman decisiones de política pública, y las instituciones dedicadas a la investigación social y a la producción de información útil para el diseño de políticas, está muy fuertemente determinado por el debilitamiento de los partidos políticos y de los centros de investigación producido en los años noventa. Los partidos políticos, precariamente institucionalizados, no cuentan con claras propuestas programáticas, elaboran programas genéricos para las coyunturas electorales, por lo que parece relativamente innecesario mantener vínculos fuertes con centros de formulación de ideas y propuestas de políticas públicas. La escasa importancia que los partidos asignan a las propuestas programáticas y de gobierno se entiende en el marco del espíritu antipolítico y “pragmático” promovido desde el gobierno durante el período fujimorista y que ha calado en la cultura política del país. Este sentido común consideraba que los partidos eran inútiles, e incluso perjudiciales, para la canalización de las demandas de la ciudadanía, pues priorizaban la defensa de intereses particulares o estrictamente partidarios. Frente a partidos ineficientes y poco representativos, la propuesta era entonces privilegiar la acción de técnicos independientes, despolitizados, que renovarían la gestión pública. Así, por un lado, los partidos

estiman que los técnicos se contratan, por lo que no sería necesario tenerlos dentro o cerca del partido; y por otro, tenemos tecnócratas que juzgan que los partidos estorban o contaminan las decisiones con “motivaciones políticas”, dándose así una separación y una relación utilitaria entre ambos. Como consecuencia, en la actualidad los *think tanks* que ejercen influencia en la agenda de políticas públicas lo hacen a través de redes informales que alcanzan a ministerios y otras áreas clave del Estado, que poco o nada tienen que ver con mediaciones partidarias o institucionales en sentido estricto.

Como vemos, en el período actual se mantienen las tendencias de la década de 1990, pese a los grandes cambios políticos ocurridos. Aun cuando Toledo y García desarrollaron campañas enfatizando el cambio y una mayor preocupación por una agenda social y redistributiva, en realidad el desempeño de sus gobiernos resultó siendo muy distinto a lo esbozado en aquellas. En ambos casos, una vez electos, los presidentes cambiaron considerablemente sus entornos, incorporando a personajes que no habían tenido participación durante la campaña, pero que empezaron a tomar decisiones de gobierno. Estamos ante la problemática de los *policy switches* (Stokes 1999), que ahondan la barrera de desconfianza y los problemas de legitimidad de los partidos y del sistema político.

Un asunto importante que debemos resaltar en la etapa actual es que, en medio del vacío dejado por los partidos en lo que respecta a la articulación y formulación de propuestas de política, se han ido perfilando espontáneamente dos grandes redes de *expertise* técnico y profesional: una emparentada con políticas liberales, con diversos grados de vinculación con el Estado durante la década de los noventa, y otra más vinculada a políticas de izquierda, con diverso grado de identificación con IU y los partidos que la conformaban en la década de los ochenta. Así, pese a que no tenemos partidos propiamente liberales ni partidos de izquierda, técnicos de esas orillas han influenciado decisivamente en las políticas públicas de los últimos años, los primeros más cercanos al gobierno de García, los segundos a los de Toledo y Paniagua, aunque con superposiciones significativas.

Los gobiernos de “transición” —Paniagua y Toledo— estuvieron marcados por una notoria apertura política, que contrastó con el carácter autoritario del fujimorismo. En esos años, en contraposición a este último, se pusieron de relieve los valores asociados a la “institucionalización democrática”, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de tener un patrón de crecimiento más incluyente. El gobierno de Paniagua no era partidario por definición y el de Toledo no contaba con un partido (Perú Posible) mínimamente consolidado; por eso, ambos tuvieron que convocar a técnicos y profesionales de diversos orígenes (también el gobierno de García, aunque con una orientación

diferente, como veremos). Así, sectores provenientes de la izquierda tuvieron una inesperada oportunidad de acceder a responsabilidades de gobierno o a espacios de gran influencia. El gobierno de Alejandro Toledo convocó a ex militantes de izquierda y tecnócratas de centros de investigación asociados a ellos, que recobraron influencia política a pesar de que en la arena electoral las candidaturas de izquierda obtuvieron un respaldo mínimo. Profesionales e intelectuales de izquierda que hasta entonces habían estado apartados de la política fueron colocados en puestos de alta responsabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y en ministerios de áreas sociales. Aunque su permanencia fue inestable, su participación en el gobierno devolvió la notoriedad perdida a ciertos centros de investigación universitarios como el Departamento de Economía de la Universidad Católica, entre otros.¹³

No obstante su éxito en el impulso de algunas políticas en el campo social y otras como la descentralización y la constitución de gobiernos regionales, estos sectores no logran cambiar la orientación general de las políticas económicas seguidas desde la década de 1990. La razón es que convivían en el manejo estatal con sectores liberales, que en realidad lideraban la orientación más global del gobierno. Así, este período se caracteriza por un sector público que se abastece de personal y estudios provenientes no solo de los ya asentados *think tanks* liberales que formaron las redes tecnocráticas informales que dominan la formulación de políticas públicas en el campo económico desde el período fujimorista, sino además de miembros de los antiguos centros de investigación y partidos políticos de izquierda de los años ochenta, aunque de manera relativamente subordinada, lo que genera una dinámica más pluralista.

Ahora bien, la presencia de estos nuevos grupos de profesionales o centros de investigación en la política no significa que la relación entre *think tanks* y partidos políticos haya cambiado en lo fundamental. Los partidos surgidos en la década de los noventa tienen un perfil pragmático y desideologizado, y están poco interesados en desarrollar planes programáticos, capacitar a sus cuadros políticos, o recurrir institucionalmente a la asesoría de los *think tanks*. La situación mejora un poco con los partidos tradicionales, aunque no sustantivamente como veremos. Empecemos analizando los casos de los partidos más importantes surgidos de 1990 en adelante.

El caso de Perú Posible (PP) es muy representativo de la escasa o nula conexión de los partidos con los *think tanks* en este período. A pesar de llegar a ocupar la Presidencia de la República y de haber jugado un rol político importante en la organización de las manifestaciones de rechazo al fujimorismo en el marco de las elecciones del año 2000, el partido no tenía un aparato organizacional desarrollado. Una vez en el gobierno, ante

la ausencia de cuadros políticos propios y capacitados para asumir funciones públicas, el presidente Toledo convocó o fue abordado por expertos de diferentes tendencias políticas, de los que se rodeó para construir una mínima base de apoyo. Toledo concedió un gran margen de autonomía a estos personajes, quienes a su vez constituyeron equipos de trabajo basados en sus propias redes personales. Esto explica la coexistencia, en otras circunstancias difícilmente imaginable, de técnicos liberales que tuvieron cargos durante el fujimorismo, principalmente en el área económica, y de ministros o funcionarios importantes provenientes de la izquierda, que lograban ganar espacio en campos como la descentralización o las políticas sociales.

El caso del Partido Nacionalista Peruano (PNP) también es representativo de los partidos políticos personalistas y débilmente institucionalizados fundados en los últimos años, a pesar de que cuenta con un perfil ideológico más definido que otros a la izquierda del espectro político. Sin embargo, la mayor claridad ideológica no ha llevado a una mejor definición de programas, de políticas públicas, con lo cual la relación con *think tanks* sigue ausente. El principal encargado de la elaboración de su plan de gobierno y luego candidato a la alcaldía metropolitana de Lima, Gonzalo García, logró articular a un conjunto de profesionales sin adscripción alguna con el Partido Nacionalista, siendo él mismo un independiente dentro del partido (cabe recordar que el PNP solo logró su inscripción formal como partido después de las elecciones de 2006, por lo que la candidatura de Humala se dio en alianza con Unión por el Perú - UPP). G. García formó parte de IU en los años ochenta y durante la transición ingresó a la administración pública como director del Banco Central de Reserva. Concluidos los procesos electorales del año 2006 (presidencia, congreso, y regionales y municipales), tanto G. García como el grupo de técnicos que lo acompañó se alejaron del partido y no mantienen vínculos en la actualidad con este.¹⁴ La limitación de un partido como el PNP se evidencia además en el desmembramiento de su bancada partidaria (UPP-PNP) en el Congreso de la República, lo que por supuesto debilita su capacidad para impulsar su agenda legislativa.

Más adelante veremos cómo la baja legitimidad de los partidos afecta también la disposición de los *think tanks* para colaborar con ellos. Desde el punto de vista de los *think tanks* que desean poner en agenda determinadas propuestas, resulta más efectivo relacionarse con legisladores específicos interesados en el tema antes que con bancadas partidarias.

Veamos ahora a los partidos con más tradición y raíces ideológicas. El partido más importante, el Partido Aprista Peruano, había prácticamente desaparecido durante el fujimorismo, pero se reconstruye con el retorno al país de su líder máximo, Alan García. El triunfo del PAP en las elecciones presidenciales de 2006 marca una diferencia con los

gobiernos anteriores, por la mayor solidez organizativa del partido de gobierno. Los partidos débiles se ven forzados a rodearse de diferentes y nuevos expertos una vez en el gobierno y no son capaces de oponerse a esta convocatoria de manera eficaz, mientras que en el caso del PAP hay una fuerte presión por dar cabida a los cuadros políticos y militantes, cediendo espacios solo cuando es estrictamente necesario.¹⁵ Así, el manejo de la economía parece haberse dejado a cuadros liberales,¹⁶ mientras que el área social sería el espacio reservado para el partido de gobierno, mirándose con excesivo recelo a los sectores provenientes de la izquierda.¹⁷

El reciente nombramiento como presidente del Consejo de Ministros de Yehude Simon (octubre 2008), ex diputado por IU durante el primer gobierno de García (1985-1990), injustamente preso por delito de terrorismo durante el gobierno de Fujimori y excarcelado por una comisión de indultos, pareciera relativizar esta última afirmación. Efectivamente, a partir de este cambio algunos ministros y funcionarios provenientes de ONG identificados con posiciones de izquierda han recuperado cierta influencia en el gobierno. Sin embargo, la naturaleza del nombramiento de Simon, resultado de una audaz estrategia del Presidente de la República para hacer frente a una coyuntura de crisis, coloca una sombra de duda sobre la sostenibilidad de estos funcionarios en sus cargos. En todo caso, este nombramiento es una nueva expresión de la tendencia al ingreso y salida de técnicos en función de personalidades que ya hemos señalado. Simon ha logrado atraer a funcionarios y técnicos que le son afines, sin que por ello se establezcan relaciones entre estos y su partido, o menos aún entre el PAP y sus instituciones de origen.

En todo caso, el PAP, al igual que el PPC, por el hecho de ser un partido con cierta tradición ideológica, marca diferencias con partidos como PP o el PNP. Los primeros partidos nombrados cuentan con centros de formación de cuadros que pretenden dar inicio a un proceso de renovación partidaria. Podría decirse que estamos ante un intento muy precario de constituir *think tanks* con vínculos orgánicos con partidos; instituciones promovidas por partidos tradicionales, o más claramente por sus líderes principales. Se trata de entidades instauradas con el claro mandato de formar cuadros políticos que puedan eventualmente asumir funciones de gobierno en organismos públicos. Es el caso del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), fundado por personajes vinculados al PAP, y del Instituto Peruano de Economía Social de Mercado (IPESM), creado por personajes vinculados al PPC. Ambas son iniciativas muy recientes en las cuales la influencia de los líderes máximos de los partidos, Alan García y Lourdes Flores, fue decisiva.

El Instituto de Gobierno de la USMP fue fundado en 2001 con la participación de algunos destacados apristas, incluyendo al entonces derrotado candidato a la presidencia

Alan García. Debe recordarse que el PAP parecía un partido extinto en los años noventa, pero volvió al centro de la arena política con el retorno de García, quien diagnosticó la necesidad de promover espacios de capacitación para cuadros, asunto desatendido durante los años del fujimorismo. Estos esfuerzos han tenido resultados, pues en la actualidad se observa que algunos de los estudiantes y profesores involucrados con el Instituto están ahora trabajando en diversas entidades públicas. Al ser entrevistado por los autores de este estudio, Javier Tantaleán,¹⁸ actual director del Instituto de Gobierno de la USMP (García fue director hasta 2005), manifestó que esta entidad jugó un rol fundamental en la formación y selección de muchos profesionales que luego asumieron cargos de responsabilidad en el gobierno aprista. En todo caso, por ahora la institución ha tenido cierta incidencia en la formación y capacitación de personal político, antes que en la investigación y generación de propuestas de políticas públicas.

Por otro lado, el IPESM, cercano al Partido Popular Cristiano, fue fundado también en el período de la transición, cuando se hacía necesario el fortalecimiento interno del partido para enfrentar con éxito la renovada competencia política. Del mismo modo que el Instituto de Gobierno de la USMP, el IPESM es un centro de formación de personal político creado por los principales líderes del partido, en este caso por la ex candidata a la presidencia por la alianza electoral Unidad Nacional (UN), de la que forma parte el PPC, Lourdes Flores Nano. Este espacio sirvió, además, para el ensayo de propuestas de política pública en campos específicos como el de los programas sociales, a través del establecimiento de convenios de consultorías con profesionales y centros de investigación liberales. Sin embargo, derrotada UN en las elecciones de 2006 y retirada su lideresa a la actividad privada, el IPESM perdió su impulso inicial y hoy, si bien no ha dejado de existir, su presencia pública y actividades no son muchas. El principal encargado de la elaboración del plan de gobierno de UN y subsecretario general del PPC no le asigna al IPESM el estatus de *think tank*, y considera las investigaciones realizadas antes de la campaña en el campo de políticas públicas como un aporte más entre muchos otros tomados en cuenta para la elaboración del plan.¹⁹ Por su parte, la asesora de la bancada de UN en el parlamento, la abogada y politóloga Milagros Campos, piensa que el IPESM fue un proyecto de la lideresa del partido que se dejó relativamente de lado como resultado de su derrota en las elecciones presidenciales del año 2006, pero que habría tenido un rol de mayor relevancia de resultar ganadora Lourdes Flores.

En general, los partidos políticos con representación en el Congreso recurren muy pocas veces a los *think tanks*, ya sea para recabar información, para encargarse de estudios sobre temas de políticas públicas en discusión o para recibir asesoría técnica. Un espacio de encuentro entre los partidos políticos y este tipo de *think tanks* puede darse en el

seno de las comisiones del Congreso, espacios en los que se consulta o invita a especialistas para escuchar sus puntos de vista.

¿Y qué se puede decir de las ONG y de los centros de investigación de universidades y gremios? En los últimos años, algunas ONG ganaron cierta capacidad de influencia con estudios e investigaciones que buscan producir propuestas de políticas públicas en determinados campos de acción estatal, pero al margen de los partidos. Algunas de estas ONG, cuyos miembros tienen un pasado de militancia en los partidos de izquierda, se especializan en áreas como el proceso de descentralización y regionalización, reformas políticas electorales, políticas educativas, políticas en salud y reformas en el sector defensa. En ello resultó clave el apoyo financiero internacional; es el caso de Propuesta Ciudadana, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) o el Instituto de Defensa Legal (IDL).

En lo que respecta a Propuesta Ciudadana, se observa que la apertura de espacios políticos de concertación y participación favoreció el trabajo de promoción de determinados temas en la agenda pública. Instituciones como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) se mostraron muy permeables y dispuestas a recoger sus sugerencias y propuestas de política sobre el tema de la descentralización, por ejemplo. Las estrategias de incidencia de estas instituciones se basan en el establecimiento de redes de influencia con políticos o funcionarios particulares con los que se tiene algún vínculo personal, y su presencia se ha hecho mayor en los últimos años. Cabe mencionar también el proyecto PRODES (ProDescentralización) en esta área de políticas, aunque con una orientación más liberal. Tanto Propuesta Ciudadana como PRODES contaron con el apoyo de fondos de USAID, sin los cuales su trabajo probablemente no habría sido posible. Así como el Grupo Propuesta Ciudadana funcionó como un *think tank* con intenciones explícitas de influir en el campo de la descentralización y regionalización, hubo ONG como el IDL que plantearon e impulsaron exitosamente la introducción de lineamientos de reforma en el sector justicia o defensa, u otras como GRADE, donde se han realizado importantes investigaciones en el campo de la educación y cuyos investigadores son consultados constantemente por funcionarios del sector.

Están, por otro lado, los *think tanks* vinculados a posiciones liberales o empresariales, los cuales ejercen una fuerte influencia sobre algunas entidades públicas mediante mecanismos y redes informales. Entre ellos destacan instituciones como el IPE, APOYO y COMEX. Estos mantienen su influencia y funcionan como centros de investigación para el Estado realizando consultorías, generando ideas e insumos útiles para las políticas públicas, así como también formando profesionales en capacidad de asumir cargos

públicos, especialmente en lo que concierne a la política económica. Ya hemos descrito el caso del IPE, uno de los más grandes e influyentes *think tanks* de los últimos quince años, desde que se emprendió el giro hacia las reformas neoliberales en el fujimorismo. Su posición a favor de políticas de libre mercado ha sido explícita. De hecho, fue creado en 1994 con el claro mandato de proveer apoyo técnico y conocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de llevar adelante las reformas estructurales de la época. En el caso de COMEX sucede algo similar: formado a partir de la asociación de empresas comerciales exportadoras e importadoras, tiene como uno de sus principales objetivos interceder por los intereses de sus agremiados. Como parte de esta tarea asume proyectos de investigación, tanto para mantener informados a sus agremiados como para sustentar sus propuestas y hacerlas más accesibles a los funcionarios públicos. A pesar de los importantes cambios políticos ocurridos en los últimos años, la continuidad en la orientación de las políticas explica la prolongación de la influencia de estas instituciones, aunque a través de mecanismos informales.²⁰

5. Redes tecnocráticas y democracia: algunas recomendaciones

Tras revisar las relaciones entre partidos políticos y *think tanks* en el país, es posible ubicar el caso peruano dentro de la tipología desarrollada por Garcé en este volumen para analizar las relaciones entre *think tanks* y partidos políticos en América Latina. Garcé identifica cuatro cuadrantes, resultado de la intersección entre dos rectas que van de sistemas de partidos poco institucionalizados a muy institucionalizados y de poca conexión a mucha conexión de estos con *think tanks*, resultando el orden: I, partidos poco institucionalizados y poco conectados con *think tanks*; II, partidos poco institucionalizados pero muy conectados con *think tanks*; III, partidos institucionalizados pero poco conectados con *think tanks*; IV, partidos institucionalizados y muy conectados con *think tanks*. En ese marco, podría decirse que el Perú puede ubicarse claramente como un caso de partidos poco institucionalizados y poco conectados con *think tanks*; cabría decir que en la década de 1980 el Perú se acercaba más al cuadrante IV, pero se alejó de él en los años noventa. De 2001 en adelante el país nuevamente se acerca un poco al cuadrante IV, pero en forma muy limitada.

Es en este escenario de partidos débiles que hemos identificado como tendencia fundamental que las políticas públicas tienden a ser dominadas por redes de influencia tecnocrática. Al no haber vínculos institucionales y transparentes entre partidos y centros intelectuales, las políticas terminan siendo definidas por la presión de grupos de poder de facto, globales y locales, que no son pasibles de control o rendición de cuentas. Para la frágil democracia peruana, el predominio de las redes tecnocráticas sobre los procesos de formulación de políticas públicas acentúa los problemas de legitimidad del sistema

político. Los ciudadanos perciben que los políticos en campaña prometen cosas que luego no cumplen, o que los gobiernos cambian pero las políticas siguen siendo las mismas, lo que genera desafección.

Ahora bien, esta forma de elaboración de políticas es también precaria e inestable: si bien en los últimos años ha habido una importante continuidad en las líneas generales de manejo macroeconómico del país, que ha sido básica para explicar el crecimiento económico reciente, ello ha sido más consecuencia de inercias y de la debilidad de los partidos de gobierno que de decisiones meditadas y justificadas; y si es que dejamos el espacio de la macroeconomía y analizamos qué sucede con las políticas sectoriales, encontraremos una gran precariedad y volatilidad que impiden el desarrollo de políticas eficaces. La inestabilidad de las políticas es consecuencia de que su rumbo es altamente dependiente de contactos personalizados entre funcionarios y técnicos, y de que se desarrollan en medio de la ausencia de orientaciones claras de un programa de gobierno. Este patrón empeora por la mutua debilidad y desconfianza que existe entre los partidos y los *think tanks*. Por un lado, los partidos desconfían del rol de los profesionales e intelectuales con experiencia política en los partidos de izquierda, puesto que el hecho de formar parte de centros de investigación universitarios u ONG es percibido como el encubrimiento de una forma de hacer política por otros medios. También existen prejuicios contra los *think tanks* liberales, que por su cercanía al gobierno de Fujimori son vistos como cómplices de algunos de sus malos manejos, que querrían dejar en el olvido. Por otro lado, los *think tanks* perciben a los partidos como muy poco preparados para gobernar, siguiendo cálculos de corto plazo en el mejor de los casos, cuando no lógicas clientelísticas o corruptas. En un panorama como este es difícil acordar políticas sectoriales que perduren en el tiempo.

Esta es una clave importante para entender por qué en el Perú el producto bruto crece muy por encima del promedio de la región y, sin embargo, los niveles de pobreza y bienestar social casi no se ven afectados, mientras en otros países se registran avances importantes. ¿Por qué en el Perú el gasto social no aumenta en cantidad y calidad, a pesar de la relativa bonanza económica de los últimos años? ¿Por qué no hay mejores efectos redistributivos? Consideramos que gran parte de la respuesta se encuentra en la debilidad del Estado, así como en la distancia y desconfianza recíproca entre los políticos y las redes de expertos y técnicos capaces de implementar políticas eficaces.

Podría pensarse que la mayor influencia de las redes tecnocráticas es algo positivo para la toma de decisiones, por el hecho de abrir la arena pública más allá de los partidos. La literatura sobre redes de políticas y nuevas formas de conducción social (Fleury 2002; Lechner y otros 1999; Messner 1999) considera a estas como generadoras de

oportunidades para la inclusión de nuevos actores dentro del campo de la deliberación y formulación de políticas públicas. La literatura sobre las redes de actores privados y públicos que tienen influencia en las políticas públicas entiende que la conformación de estas es el resultado de procesos de democratización, descentralización y complejización de las sociedades modernas. Según Lechner y otros (1999), la clásica organización centralizada en el eje del Estado es reemplazada por nuevas formas de coordinación social más ágiles y flexibles, como lo son la coordinación centrada en el mercado y la coordinación por redes. El reto del período en que el Estado deja de ser el núcleo exclusivo de representación, planificación y conducción pública, consiste en la generación de nuevas formas de coordinación que permitan la inclusión de nuevos actores. Por otro lado, en la década de 1990 se desarrolló la literatura sobre los *technopols*, expertos con capacidades de acción política, que fueron los artífices del cambio de modelo de desarrollo en América Latina, del abandono de políticas populistas y estatistas y la adopción de políticas orientadas al mercado, algo que parecía imposible de lograr en su momento (Domínguez 1997).

En el caso peruano, sin embargo, el funcionamiento de estas redes no constituye una ampliación de un campo de acción monopolizado por los partidos y el Estado que abre espacios para la participación de la sociedad civil, sino más bien una sustitución de los partidos por redes no sujetas a control ciudadano y deliberación pública, con riesgos evidentes de caer en lógicas particularistas. No creemos que sea casualidad que al analizar el destino de los *technopols* tan bien apreciados por esa literatura se constatare que los países en los que su participación fue positiva son aquellos con sistemas de partidos más fuertes, mientras que en los países donde la competencia política era más restringida o caótica, los resultados fueron claramente negativos. En el primer caso podría ubicarse a personajes como Fernando Henrique Cardoso en el Brasil y Alejandro Foxley en Chile; en el segundo, a Pedro Aspe en México, Domingo Cavallo en la Argentina y Alberto Dahik en el Ecuador.

Frente a este panorama, ¿qué recomendaciones podrían esbozarse para acercarnos a una relación virtuosa entre Estado, partidos y *think tanks*? Habría que actuar en varios frentes. Una de las recomendaciones que se desprende de este estudio es que se tiene que promover la investigación aplicada en los centros de investigación, el desarrollo de políticas de Estado consecuencia de un debate y deliberación pública, y el encuentro regular entre la comunidad académica y los actores políticos. Es necesario que los *think tanks* investiguen sobre los temas de la agenda política existente y aporten con nuevas y mejores herramientas de análisis o interpretación sobre aquellos que preocupan a los partidos. En esta línea, una iniciativa interesante ha sido puesta en práctica por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), que en 2007 utilizó una nueva

estrategia de incidencia política para las investigaciones de sus centros asociados. En lugar de solo organizar reuniones para socializar los resultados de sus estudios y debatir con los actores políticos, estableció un Consejo Consultivo Público, conformado por representantes de ministerios y organismos públicos, que propuso temas de la agenda política sobre los que se necesitaba mayor información y análisis social.²¹ Para que esto se dé, es fundamental el papel que juega la cooperación internacional y el establecimiento de fondos públicos y privados dedicados a la investigación en temas prioritarios.

Otra manera de afrontar el déficit en la calidad de las políticas públicas, mantenido por la débil relación entre *think tanks* y partidos, es mejorar la capacidad técnica del Legislativo mediante el asesoramiento de los centros de investigación a las comisiones parlamentarias y sus respectivos secretarios técnicos. Si bien esto podría limitar la colaboración de las instituciones de la sociedad civil a una agenda legislativa establecida y a la voluntad de los actores políticos involucrados en determinados temas, sin contribuir al fortalecimiento programático de los partidos, es importante avanzar en este aspecto pues aporta a la solución del problema apremiante de la calidad del proceso legislativo. La profesionalización del trabajo en el Congreso facilitaría la comunicación entre los centros de investigación y los políticos. Esta es una meta factible de alcanzar.

Finalmente, una de las principales medidas que favorecerían el fortalecimiento de los partidos políticos en materia de formación de cuadros y desarrollo programático sería fomentar la creación de centros de capacitación, formación y elaboración de propuestas vinculados a aquellos. Para tal fin, sería importante que el financiamiento público contemplado en el artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos (Ley 28094) sea efectivamente implementado y destinado a actividades de capacitación e investigación.²² Esta medida debería ir acompañada de otras para que, en efecto, las plataformas electorales de los partidos se conviertan en orientaciones de gobierno y propuestas legislativas. Complementariamente, consideramos que una profundización de la lógica de la ley de partidos y de la ley de barrera electoral, que eleva los costos de entrada al sistema político, sería positiva en la medida en que ayudaría a restringir el espacio para los partidos más improvisados, personalistas y oportunistas, y a perfilar mejor las opciones más fuertes, con lo que la oferta y la competencia política podrían alinearse más claramente siguiendo lógicas ideológicas y de programas de gobierno.

Bibliografía

CONAGHAN, Catherine M.

1997 “Las estrellas de la crisis. El ascenso de los economistas en la vida pública peruana”. *Pensamiento Iberoamericano*, n.º 30, pp. 177-206.

CONAGHAN, Catherine M. Y James M. MALLOY

1994 *Unsettling statecraft. Democracy and neoliberalism in the Central Andes*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

DOMÍNGUEZ, Jorge, Editor

1997 *Technopols. Freeing politics and markets in Latin America in the 1990s*. University Park, PA: Penn State University Press.

FLEURY, Sonia

2002 “El desafío de la gestión de las redes políticas”. *Revista Instituciones y Desarrollo*, n.ºs 12-13. Barcelona: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, pp. 221-247.

GONZALES DE OLARTE, Efraín

1991 *El péndulo peruano. Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990*. Lima: IEP - CIES.

LECHNER, NORBERT, René MILLÁN Y Francisco VALDÉS, Coordinadores

1999 *Reforma del Estado y coordinación social*. México, D. F.: Plaza y Valdés: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México.

LEVITSKY, Steven Y LUCAN WAY

2002 “Elections without democracy: the rise of competitive authoritarianism”. *Journal of Democracy*, vol. 13, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, pp. 51-66.

LYNCH, Nicolás

1999 *Una tragedia sin héroes: la derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 1980-1992*. Lima: UNMSM.

MEJÍA, Andrés

2008 *Do legislatures —and legislators— matter for poverty reduction?* Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.

MELÉNDEZ, Carlos

- 2007 “Partidos y sistema de partidos en el Perú”. En: Rafael Roncagliolo y Carlos Meléndez, editores, *La política por dentro: cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. Lima: IDEA Internacional / Transparencia.

MESSNER, Dirk

- 1999 “Del estado céntrico a la ‘sociedad de redes’. Nuevas exigencias de la coordinación social”. En: Norbert Lechner, René Millán y Francisco Valdés, coordinadores, *Reforma del Estado y coordinación social*. México, D. F.: Plaza y Valdés: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México, pp. 77-122.

TANAKA, Martín

- 1998 *Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú 1980-1995 en perspectiva comparada*. Lima: IEP.
- 2005 *Democracia sin partidos Perú 2000-2005: los problemas de representación y las propuestas de reforma política*. Lima: IEP.
- 2006 “From crisis to collapse of the party systems and dilemmas of democratic representation: Peru and Venezuela”. En: Scott Mainwaring, Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro, editores, *The crisis of democratic representation in the Andes*. Stanford: Stanford University Press, pp. 47-77.

TUESTA, Fernando

- 1995 *Sistema de partidos políticos en el Perú 1978-1995*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

STOKES, Susan

- 1999 “What does policy switches tell us about democracy?” En: A. Przeworski, S. Stokes y B. Manin, editores, *Democracy, accountability and representation*. Nueva York: Cambridge University Press, pp. 98-130.

Notas

- 1 Al respecto, véase Levitsky y Way 2002; y Tanaka 2006.
- 2 Véase la lista de los entrevistados por los autores del estudio en el anexo 2.
- 3 Esto nos fue explícitamente comentado en las entrevistas por Patricia Teullet, gerente general de COMEX Perú, así como por Javier Azpur, de la ONG Propuesta Ciudadana. En el caso de las ONG, los donantes que financian sus iniciativas muchas veces exigen que sus estrategias de incidencia se basen en relaciones pluralistas, sin privilegiar vínculos con ningún partido en particular.
- 4 Sobre el debate en torno a la vigencia o no de un sistema de partidos en el Perú puede verse Tuesta 1995 y Lynch 1999. La posición que aquí asumimos respecto de estos años se desarrolla sobre la base de lo expuesto en Tanaka 1998.
- 5 Entrevista a Ernesto González, asesor de la Fundación Friedrich Ebert.
- 6 Al respecto, véase Conaghan y Malloy 1994.
- 7 Entrevista a Percy Táborny, subsecretario general del PPC.
- 8 En 1995, el PAP obtuvo 8 escaños, AP 4, el PPC 3 e IU 2, sumando todos 17 de 120 miembros; en votos, el PAP obtuvo el 7%, AP el 3%, el PPC el 3% e IU el 2%, sumando todos el 15%.
- 9 Entrevista a Fritz Du Bois, investigador del IPE.
- 10 Entrevista a Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana.
- 11 Sobre el funcionamiento de los partidos en la década de 1990 véase Meléndez 2007.
- 12 Esta posición se desarrolla en Tanaka 2005.
- 13 Entrevista a Félix Jiménez, profesor en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Gonzalo García, jefe de plan de gobierno del Partido Nacionalista Peruano.
- 14 Entrevista a Gonzalo García.
- 15 Sobre el funcionamiento interno del gobierno de García entrevistamos al antropólogo Juan Ossio.
- 16 Estos cuadros provienen de diversas canteras, dentro de las que destaca el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Por ejemplo, en el momento actual la ministra de Comercio, el jefe de asesores del MEF, el viceministro de economía del MEF y el presidente del BRCP proceden del CIUP. Sin embargo, estas personas están allí a título personal y su participación no involucra a la institución, que cuenta también con investigadores con posturas de oposición al gobierno.
- 17 Entre los años 2007 y 2008, el presidente García escribió una serie de artículos para el diario *El Comercio* (“El perro del hortelano”), el de mayor prestigio entre las élites económicas y sociales del país, exponiendo no solo las reformas que consideraba prioritarias para promover la inversión privada y modernizar la economía, sino también las razones que lo separaban de quienes identificaba como sus principales críticos: las ONG y la prensa identificada con posiciones de izquierda.
- 18 Jefe de plan de gobierno del PAP.
- 19 Entrevista a Percy Táborny.

- ²⁰ Entrevistas a Fritz Du Bois, Patricia Teullet y Gabriel Ortiz de Zeballos, este último investigador de APOYO.
- ²¹ Entrevista a Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES.
- ²² Artículo 29: “Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados en actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario”.



Anexo 1
Listado de *think tanks* analizados

Institución	Fecha de fundación
IEP – Instituto de Estudios Peruanos	1964
DESCO – Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo	1965
Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú	1969
Fundación Friedrich Ebert	1970
CIUP - Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico	1972
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	1972
CEDEP – Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación	1977
Grupo APOYO	1977
ILD – Instituto Libertad y Democracia	1980
CIES – Centro de Investigación Económica y Social	1989
IPE – Instituto Peruano de Economía	1994
COMEX – Sociedad de Comercio Exterior del Perú	1998
Grupo Propuesta Ciudadana	1992
IPESM – Instituto Peruano de Economía Social de Mercado	2001
Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres	2001

Anexo 2
Lista de entrevistados *

- Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana
 - Ana Lucía Camaíora, directora de investigaciones legales del Instituto Libertad y Democracia (ILD)
 - Milagros Campos, asesora del grupo parlamentario Unidad Nacional en el Congreso de la República
 - Fritz Du Bois, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE)
 - Gonzalo García, jefe de plan de gobierno del Partido Nacionalista Peruano (PNP)
 - Ernesto González, asesor de la Fundación Friedrich Ebert, Perú
 - Félix Jiménez, profesor en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
 - Gabriel Ortiz de Zevallos, investigador de APOYO
 - Juan Ossio, profesor en el Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
 - Henry Pease, ex congresista por Perú Posible y ex presidente del Congreso de la República 2003-2004
 - Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
 - Percy Táborny, subsecretario general del Partido Popular Cristiano (PPC)
 - Javier Tantaleán, jefe de plan de gobierno del Partido Aprista Peruano (PAP)
 - Patricia Teullet, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú)
- * Todas las entrevistas se realizaron entre setiembre y noviembre de 2008.